

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### SALA DE DECISIÓN LABORAL

El veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por la señora **FLOR MARÍA ARIAS CÓRDOBA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** (en adelante COLPENSIONES), tramitado bajo el radicado único nacional No. 05001-31-05-014-2017-00304-01, venido a esta instancia en apelación de la sentencia de primera instancia.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

#### 1. ANTECEDENTES:

A través de la presente acción, la demandante pretende se declare que le asiste derecho a reconocimiento de la pensión de invalidez con fundamento en el Decreto 758 de 1990 aplicando el principio constitucional de la condición más beneficiosa, y en consecuencia se condene a Colpensiones a pagar en su favor la pensión de invalidez a partir del 05 de agosto de 2006, con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación.

Como **fundamento factico de las pretensiones** expone la demandante, que presenta problemas de insuficiencia venosa de miembros inferiores desde el año 1997 con una úlcera varicosa dorsal cercana superior de talón izquierdo, diagnósticos ratificados mediante EOC DUPLEX de miembros inferiores de 2006.

Expone que mediante dictamen del 11 de julio de 2008, se le dictaminó por parte del ISS una pérdida de capacidad laboral del 51,01% con fecha de estructuración 05 de agosto de 2006.

Manifiesta que mediante Resolución GNR 092626 del 12 de mayo de 2013, confirmada a través de las Resoluciones GNR 21172 del 21 de agosto de 2013 y VPB 24446 del 13 de diciembre de 2014, Colpensiones le negó la pensión de invalidez, bajo el argumento de no contar con 50 semanas de cotización en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.

Señala que cuenta con un total de 667 semanas cotizadas, de las cuales 410 semanas fueron portadas antes del 1° de abril de 1994.

Finalmente aduce que el 12 de diciembre de 2016 presentó derecho de petición ante Colpensiones solicitando el reconocimiento de la pensión de invalidez aplicando el principio de la condición más beneficiosa, la que le fue negada mediante Resolución GNR 382380 del 16 de diciembre de 2016 Colpensiones niega el reconocimiento pensional indicando que no reúne las condiciones para aplicar el principio de la condición más beneficiosa, pero sin realizar ningún estudio de la condición más beneficiosa consagrada en la sentencia SU-442 de 2016.

## **2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:**

La oficina judicial de la primera instancia despachó de manera favorable las pretensiones de la demanda, condenando en consecuencia a COLPENSIONES a pagar a la demandante la pensión de invalidez, argumentando que si bien la demandante no cuenta con las 50 semanas en los 3 años anteriores a la estructuración de su invalidez que exige el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, se evidencia que la demandante padece de una enfermedad crónica y degenerativa y que además en su historia laboral cuenta con cotizaciones realizadas con posterioridad a dicha fecha, entre el año 2009 y 2010, de lo cual se desprende que conservó su capacidad laboral al menos hasta finales del año 2010 lo que le permitió trabajar y realizar cotizaciones al sistema general de pensiones, por lo que su caso no podía analizarse desde la óptica de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, sino desde la teoría de la capacidad laboral residual

acuñada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-588 de 2016, concluyendo entonces que bajo esta teoría la demandante cuenta con más de 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la última cotización, cumpliendo así a cabalidad con el requisito exigido en el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 por lo que es derychosa de acceder a la prestación de invalidez deprecada.

### **3. DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN:**

La anterior decisión fue apelada por los apoderados de la DEMANDANTE y de COLPENSIONES en los siguientes términos:

#### **APELACIÓN DE LA DEMANDANTE.**

El apoderado judicial de la demandante apela parcialmente la sentencia en lo que tiene que ver con la decisión de declarar parcialmente probaba la excepción de prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 20 de abril de 2014, indicando que la demandante presentó su petición de reconocimiento de la pensión el día 25 de julio de 2010, presentando además los correspondientes recursos en contra de las Resoluciones GNR 092626 del 12 de mayo de 2013, y GNR 21172 del 21 de agosto de 2013, los cuales fueron finalmente resueltos a través de la Resolución VPB 24446 del 13 de diciembre de 2014, la cual le fue notificada a la demandante el 02 de enero de 2015, fecha a partir de la cual debe contabilizarse la prescripción trienal, por lo que, teniendo en cuenta que la demanda fue presentada el 20 de abril de 2017, está claro que entre una fecha y otra no alcanzaron a transcurrir los 3 años que se exigen para aplicar la prescripción, por lo que tal declaración resulta improcedente, pues la vía gubernativa se agotó al momento de la notificación de la Resolución VPB 24446 del 13 de diciembre de 2014.

#### **APELACIÓN DE COLPENSIONES.**

El apoderado de COLPENSIONES apela la decisión de reconocer la pensión de invalidez a la demandante, solicitando que la misma sea revocada en su integridad y se absuelva a la entidad de todas las suplicas de la demanda, argumentando que a la demandante no le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez deprecada, en atención que no reúne los requisitos exigidos por el artículo 1 de la

Ley 860 de 2003, y aun dando aplicación al principio de la condición mas beneficiosa, es decir acudiendo a las normas de la original Ley 100 de 1993, la demandante tampoco cumple con el requisito de densidad de semanas exigido por dicha normatividad.

Adicionalmente señala que, en caso de confirmarse la decisión, se tenga en consideración que para la fecha en que se realizó la reclamación administrativa de la pensión de invalidez por parte de la demandante, no existía aun la jurisprudencia de la Corte Constitucional que permitió el salto normativo entre la Ley 860 de 2003 y el Decreto 758 de 1990, razón por la cual el retroactivo pensional deberá ser reconocido a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia y no desde la fecha indicada por el *a quo*, pues ello afectaría la sostenibilidad financiera del sistema.

Finalmente solicita que no se condene en costas a la entidad demandada dado que esta ha actuado de buena fe, y teniendo en cuenta lo preceptuado en la Ley.

#### **4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:**

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, ninguna de las partes allegó escrito de alegatos de conclusión.

#### **5. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER:**

El problema jurídico para resolver en esta instancia se circunscribe a establecer si a la demandante le asiste o no derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez, y en caso afirmativo la fecha a partir de la cual debe ser reconocida la citada prestación.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la apelación y de la consulta de la sentencia de primera instancia, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes:

#### **6. CONSIDERACIONES:**

A través de la presente acción, la demandante pretende se declare que le asiste derecho a reconocimiento de la pensión de invalidez con fundamento en el Decreto 758 de 1990 aplicando el principio constitucional de la condición más beneficiosa de la condición más beneficiosa.

No es materia de controversia entre las partes en esta instancia, que la demandante se encuentra afiliada al RPM administrado por Colpensiones, que mediante dictamen del día 11 de julio de 2008, se le determinó por parte del ISS una pérdida de capacidad laboral del 51,01% con fecha de estructuración 05 de agosto de 2006, que mediante Resolución GNR 092626 del 12 de mayo de 2013, confirmada a través de las Resoluciones GNR 21172 del 21 de agosto de 2013 y VPB 24446 del 13 de diciembre de 2014, Colpensiones le negó la pensión de invalidez a la demandante por no contar con 50 semanas de cotización en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración del estado de invalidez.

Conforme lo anterior, el único objeto de controversia en el presente proceso, acorde a los argumentos expuestos en el recurso de apelación de Colpensiones y de la actora, se sintetiza en determinar si la demandante reúne o no los requisitos legales para acceder a la pensión de invalidez, bien aplicando la norma legal vigente a la fecha de estructuración del estado de invalidez, esto es, a la luz del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, o bien bajo los postulados de la Ley 100 de 1993 en su versión original en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, y en caso afirmativo, determinar a partir de qué fecha debe ser reconocida la prestación.

Pese a lo anterior, encuentra la Sala que en sede de consulta en favor de Colpensiones, resulta relevante, previo a abordar las discusiones planteadas en los recursos de alzada, entrar a analizar la validez y pertinencia de los argumentos expuestos por el a quo para fulminar condena en contra de Colpensiones, dado que para arribar a tal decisión, el fallador de primera instancia indicó que si bien la demandante no cuenta con las 50 semanas de cotización en los 3 años anteriores a la estructuración de su invalidez que exige el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, se evidencia que la demandante padece de una enfermedad crónica y degenerativa, y que además en su historia laboral cuenta con cotizaciones realizadas entre el año 2009 y 2010, de lo cual se desprende que conservó su capacidad laboral al menos hasta finales del año 2010, lo que le permitió trabajar y realizar cotizaciones al sistema general de pensiones, por lo que su caso no podía analizarse desde la

óptica de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, sino desde la teoría de la capacidad laboral residual acuñada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-588 de 2016, concluyendo entonces que bajo esta teoría, la demandante cuenta con más de 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la última cotización, cumpliendo así a cabalidad con el requisito exigido en el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 por lo que es derecho de acceder a la prestación de invalidez deprecada.

Sobre lo resuelto por el *a quo*, debe señalarse primeramente que el artículo 281 del CGP aplicable en materia laboral por remisión del artículo 145 del CPT y la SS, define la congruencia que debe guardar una decisión judicial de la siguiente manera: *“...La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.... En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio...”*

De la anterior disposición legal, colige la Sala que la congruencia es una regla general que orienta la decisión que debe adoptar el juez, en la medida que le impone la obligación de estructurar su sentencia dentro del marco fijado por las partes con los planteamientos que hagan en sus escritos de demanda y contestación, y por consiguiente para que la sentencia sea consonante, el fallador judicial debe resolver alineándose o ajustándose a esos postulados que los mismos contendientes le fijan al litigio.

En este caso, a juicio de esta Sala, no es posible el reconocimiento de pensión de invalidez que fue ordenado por el fallador de primer grado, porque, como ya se dejó anotado previamente, la decisión del *a quo* estuvo fundamentada en la aplicación de la teoría jurisprudencial de la capacidad laboral residual acuñada por la Corte Constitucional a través de la sentencia de unificación SU-588 de 2016; sin embargo, debe tenerse en cuenta que en la demanda, no se alegó, ni se pretendió la aplicación de dicha teoría jurisprudencial, pues no se realizó pronunciamiento alguno, ni en los hechos, ni en las pretensiones, ni en los fundamentos de derecho, acerca de la posibilidad de tener en cuenta las semanas cotizadas por la

demandante con posterioridad a la realización del dictamen de pérdida de capacidad laboral, o referente a que esta haya conservado su capacidad laboral hasta el año 2010, sino que durante todo el trámite del proceso, incluyendo los alegatos de conclusión, la parte actora, consciente de que no reunía las semanas exigidas por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 o por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, encaminó la demanda y sus alegatos a lograr la aplicación del principio constitucional y legal de la condición más beneficiosa para dar el salto normativo entre la Ley 860 de 2003 y el Decreto 758 de 1990, con fundamentando en lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-442 de 2016, fundamento fáctico-jurídico, que no guarda relación alguna con la teoría jurisprudencial aplicada por el *a quo* para resolver el caso y en consecuencia encuentra esta superioridad una latente vulneración al principio de congruencia que debe existir entre la demanda y la sentencia.

Ahora, si bien al juez laboral el Art. 50 del CPTSS le permite fallar ultra o extra petita, para ello es necesario que los **hechos** que originan la condena hayan sido discutido y probados en el proceso, lo que en este caso no ha ocurrido en este caso, pues se reitera, ni en los hechos de la demanda, ni en las pretensiones, como tampoco en los fundamentos de derecho, ni en la fijación del litigio, y ni siquiera en los alegatos de conclusión se hizo mención a las cotizaciones realizadas al sistema pensional por la actora entre los años 2009 y 2010, ni se alegó la existencia de una capacidad laboral residual de la demandante con posterioridad a la fecha de estructuración de su invalidez, lo que de contera le cercenó a COLPENSIONES la oportunidad de pronunciarse frente al tema respecto del cual se produjo la condena, y de presentar o solicitar pruebas, lo que vulnera sus derechos de contradicción y defensa por lo que la sentencia del *a quo* será revocada en este aspecto, sin perjuicio que si se determina que a la demandante no le asiste derecho a la pensión, pueda peticionar su reconocimiento, y acudir a la justicia nuevamente, para que se determine si le puede ser otorgada aplicando la teoría de la capacidad laboral residual.

En razón a lo anterior, pasa la Sala a decidir sobre el derecho que tenga la actora al reconocimiento de la pensión de invalidez, aplicando el principio constitucional de la condición más beneficiosa que es lo pretendido en la demanda.

Es así, que como quiera que la promotora del litigio, presenta una pérdida de capacidad laboral del 51,01% de origen común, estructurada el 05 de agosto de

2006 conforme al dictamen de PCL emitido por el extinto ISS, obrante a folios 41 y 42, teniendo cero semanas cotizadas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, por lo que no puede acceder a la pensión bajo las preceptivas del art. 1º de la Ley 860 de 2003, que modificó el original art. 39 de la ley 100 de 1993, pretende con la demanda, que la pensión le sea otorgada con fundamento en el Decreto 758 de 1990 aplicando el principio de a condición más beneficiosa.

Conforme al reporte de semanas cotizadas expedido por Colpensiones que milita a folios 218 a 223 del expediente, la demandante realizó un total de aportes al sistema pensional de **629,71 semanas** entre el 10 de abril de 1980 y el 30 de diciembre de 2010.

La demandante, consciente como ya se dijo, que no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, ni tampoco con los exigidos en el artículo 39 de la original Ley 100 de 1993, para acceder a la pensión demandada, solicitó que la misma le fuera otorgada aplicando las preceptivas del Decreto 758 de 1990 con fundamento en el principio constitucional y legal de la condición más beneficiosa.

En cuanto a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa conforme la actual línea jurisprudencial de la SCL de la CSJ, en tratándose de pensión de invalidez, para que pueda acudir a normas anteriores a la vigente al momento de estructurarse el estado de invalidez para otorgar la citada prestación aplicando el principio en comento, resulta imperioso que la estructuración del estado de invalidez haya tenido lugar dentro de los 3 años posteriores a la entrada en vigencia de la citada ley 860 de 2003, esto es, entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006, requisito que si bien cumple la demandante pues la estructuración de la invalidez en su caso tuvo lugar el 05 de agosto de 2006, esto es, dentro de la temporalidad esgrimida por la CSL de la CSJ, no cuenta con las 26 semanas cotizadas en el año anterior a la estructuración de la invalidez, es decir entre el 05 de agosto de 2005 y ese mismo día y mes del 2006, lapso en el que cuanta con cero semanas cotizadas, pues en su historia laboral de folios 2018 a 220, presenta cotizaciones hasta el ciclo de agosto de 1999, y las retoma en mayo de 2009.



Ahora, de vieja data la jurisprudencia de la SCL de la CSJ tiene establecido que para aplicar el principio de la condición más beneficiosa sólo es posible acudir la norma anterior a la vigente al deceso del causante, en este caso que nos ocupa, a la original Ley 100 de 1993 sin que sea posible dar saltos normativos a otras leyes anteriores, por lo que en aplicación de la referida jurisprudencia, no es posible que la actora pueda acceder a la pensión bajo las reglas del Decreto 758 de 1990.

Igualmente, es relevante traer a colación la sentencia SU-556 de 2019 proferida por la Corte Constitucional, en la que se evidencia que dicha corporación luego de realizar un análisis de las posiciones jurisprudenciales que una y otra Corte han desarrollado en los últimos años con relación al principio de la condición más beneficiosa, concluyó que, en cuanto al tránsito legislativo ocurrido entre las leyes 100 de 1993 y 860 de 2003, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que **la temporalidad** en la aplicación del principio de la condición más beneficiosa no es irrazonable, e indicó además que luego de la expedición de la sentencia SU-442 de 2016, la Corte Constitucional ha señalado que *“la zona de paso”* fijada por el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral<sup>1</sup> no es contraria la Constitución<sup>2</sup>, dado que, como se señaló en aquella providencia, se fundamenta en *“uno de los principios constitucionales que informan el derecho irrenunciable a la seguridad social [...], esto es el de la condición más beneficiosa, un principio que, como se mencionó, se justifica en el artículo 53 superior y, además, surge a partir de prerrogativas del mismo rango como ‘el derecho constitucional de toda persona a que se protejan sus expectativas legítimamente forjadas’*<sup>3</sup>.

Rememora además la alta Corporación que en la sentencia SU-005 de 2018, la Corte advirtió que *“un alcance distinto (entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia) del principio de la condición más beneficiosa en materia de la pensión de sobrevivientes’, no deriva en la inconstitucionalidad del derecho viviente de la jurisprudencia ordinaria laboral en la materia”*<sup>4</sup>.

Concluye entonces la Corte Constitucional en la referida sentencia SU-556 de 2019, que la regla fijada en la sentencia SU-442 de 2016, según la cual el principio de la condición más beneficiosa da lugar a que se apliquen de manera ultractiva las

---

<sup>1</sup> Definidas en la sentencia SL-2358 de 2017.

<sup>2</sup> Sentencia T-545 de 2019.

<sup>3</sup> Sentencia SU-442 de 2016.

<sup>4</sup> Sentencia SU-005 de 2018.

disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 a aquellos afiliados cuya invalidez se hubiese estructurado en vigencia de la Ley 860 de 2003, solo es aplicable a los afiliados-tutelantes en situación de vulnerabilidad, esto es, aquellos que superen el test de procedencia contenido en dicha providencia, dado que solo respecto de estas personas es evidente una afectación intensa a sus derechos fundamentales.

Se quiere significar con lo anterior, que la tesis que venía pregonando la Corte Constitucional en el sentido de admitir la aplicación del principio de la condición más beneficiosa acudiendo al Decreto 758 de 1990 aun cuando la invalidez del afiliado se hubiera producido en vigencia de la Ley 860 de 2003, solamente se podrá seguir aplicando siempre que supere el denominado test de procedencia. Test que comprende 4 condiciones, pero no se hace posible para la Sala abordar su análisis frente a la situación de la actora, por tratarse de un asunto nuevo que no se litigó al interior del proceso que ocupa la atención de esta Sala de Decisión, y por ello no fue objeto de contradicción por las partes, ni de despliegue probatorio alguno, por lo que la Sala no cuenta con elementos de juicio para decidir.

Por lo anterior, dada la existencia de un hecho sobreviniente modificativo del derecho sustancial de carácter mínimo e irrenunciable, la presente decisión no hace tránsito a cosa juzgada respecto al derecho que pueda corresponderle a la demandante a reclamar ante la administración de justicia el reconocimiento de la prestación económica, acreditando las condiciones de la sentencia SU - 556 de 2019, por haber sido proferido dicho cambio jurisprudencial con posterioridad a la presentación de la demanda.

En conclusión, la presente sentencia, no hace tránsito a cosa juzgada, respecto al derecho que pueda corresponderle a la demandante a solicitar la prestación de invalidez en aplicación de la teoría jurisprudencial de la capacidad laboral residual acuñada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-588 de 2016, pues la decisión de revocar la sentencia de primera instancia, no se fundamenta en la ausencia de dicha capacidad laboral residual de la demandante, sino en la vulneración al principio de congruencia entre lo demandado y debatido durante el proceso y lo decidido en la sentencia. Tampoco este fallo hace tránsito a cosa juzgada, respecto al derecho que pueda corresponderle a la demandante a solicitar la prestación de invalidez, demostrando cumplir con el test de la sentencia SU - 556 de 2019.

De acuerdo a las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia consultada debe ser revocada, sin que sea necesario entonces, por sustracción de materia, entrar a resolver sobre los argumentos expuestos por ambas partes en los recursos de apelación.

Sin costas en ninguna de las instancias, por haberse revocado la sentencia en el grado jurisdiccional de consulta.

## **7. DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE**

**PRIMERO.** **REVOCAR** la sentencia del 05 de septiembre de 2019 proferida por el JUZGADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por la señora **FLOR MARÍA ARIAS CÓRDOBA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, para en su lugar **ABSOLVER** a COLPENSIONES de todas las pretensiones impetradas por la demandante, conforme las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

**SEGUNDO:** **DECLARAR** que la presente decisión no hace tránsito a cosa juzgada respecto al derecho que pueda corresponderle a la demandante al reconocimiento de la prestación económica, acreditando las condiciones de la sentencia SU - 556 de 2019, o en aplicación de la teoría jurisprudencial de la capacidad laboral residual acuñada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-588 de 2016.

**TERCERO:** Sin costas en ninguna de las instancias.

La presente sentencia se notifica a las partes por **EDICTO**.

Vuelva el expediente al juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma la providencia por quienes intervinieron en la decisión, los Magistrados,

**Firmado Por:**

**Francisco Arango Torres**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**Jaime Alberto Aristizabal Gomez**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**John Jairo Acosta Perez**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0518593a822751500ea8e856cd96e4351bf902a5e4771baa6b8ee1bb57d0e4f0**

Documento generado en 28/07/2022 01:43:30 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**